

Violencia, estado y política social

Araceli Damián*

La muerte de hombres y mujeres en México, resultado de la violencia desatada por el supuesto combate al narcotráfico ha permeado otros ámbitos de la vida, afectando a negocios, familias, escuelas, etc. Los niveles alcanzados sólo pueden explicarse en un contexto en el que se han roto los principios básicos de moralidad y ética que permiten la convivencia social, no es sólo un problema de delincuencia sino de organización social.

México es uno de los países con la mayor desigualdad del ingreso y la riqueza a nivel mundial. Ha sido laboratorio donde se han experimentado las reformas económicas más radicales impuestas a países en los que el crecimiento fue acelerado después de la Segunda Guerra Mundial con la combinación de una promoción directa del estado y participación privada.

El modelo económico se transformó bajo el discurso de la necesidad imperante de integrar la economía nacional a nivel global y promover los principios de mercado, que supuestamente permitirían resolver los problemas de atraso y pobreza en el país.

Los cambios de política se tradujeron en una sumisión del gobierno a los intereses de empresas transnacionales y organismos financieros internacionales. Las reformas se dieron en lo económico y en lo social suponiendo que el desarrollo y promoción del mercado interno no eran necesarios. Bajo esta lógica, lo más importante es ofrecer mano de obra barata para generar empleo. Aun cuando los resultados han sido muy pobres, este discurso se ha utilizado para mantener una política de contención salarial.

De igual forma el salario social se ha reducido, limitando la inversión pública destinada a ampliar el acceso a los servicios de educación, salud, etc., eliminándose también los subsidios y el control de precios de productos básicos.

Así, el gasto del gobierno federal se transformó radicalmente en pocos años, la disminución de su participación en la actividad económica, se refleja en la baja sufrida en el gasto destinado a actividades económicas, que pasó de 50.2% en 1990 a 33.5% en 2010, según datos del informe presidencial. Debemos considerar

además que en 1990 la proporción destinada a estas actividades era baja en comparación con años anteriores, debido a que las reformas estructurales empiezan en la década de los ochenta.

En lo social se ha promovido la privatización de los servicios educativos y de salud, sin control y sin garantizar el acceso de toda la población a dichos servicios. En la retórica gubernamental se asegura que el gasto social es el más elevado de las últimas décadas. ¿Cómo no va a ser así si el gasto en materia económica se ha reducido enormemente? Pero además, dentro del gasto social lo que verdaderamente ha aumentado es el peso de las pensiones en el total.

Éstas pasaron de representar 0.6% del gasto social a inicios de la década de los noventa a casi 15% en 2000 y bajan a 12.6% en 2010. El porcentaje es similar al gasto en salud, que con todo y el supuesto aumento en la cobertura “casi universal” del Seguro Popular, llega a 14.5% del total cuando alcanzó 21.1% en 1991. En lo que se refiere a educación la tendencia desde 2002 ha sido a la baja pasando de 24.2 en ese año a 20.2% en 2010 (ver gráfica anexa).

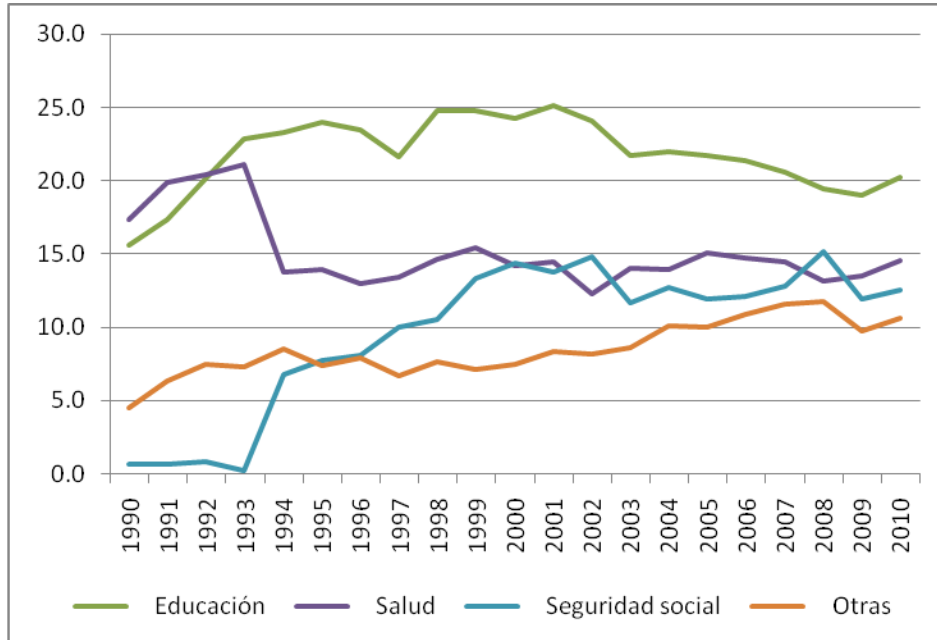
¿Qué tanto contribuye estos procesos al desmembramiento de la sociedad? Nadie puede negar que la falta empleos con un ingreso suficiente para vivir dignamente, así como la falta de acceso real a los servicios de salud y educación pueden llevar a algunas personas a la desesperación y, dado el contexto actual, a la violencia.

Por otra parte, debemos tener muy claro que cuando los individuos mueren masivamente como resultado de la violencia, su muerte es responsabilidad del estado. No son muertes aisladas sino sistémicas y aunque no podemos hablar propiamente de genocidio (porque no se trata de un problema racial o político), podríamos llegar a decir que en México algo similar está ocurriendo que hasta ahora no tiene nombre.

El estado mexicano es responsable porque no ha dotado de las condiciones materiales que eviten las muertes de jóvenes y otras víctimas de esta lucha maldita. El estado es responsable porque no hace nada por reducir la enorme desigualdad y la pobreza que lleva a muchos a la violencia. El estado mexicano es responsable porque ha dejado en la impunidad los asesinatos de mujeres en

Juárez y de luchadores sociales. El estado es responsable porque ha permitido la corrupción sin medida y el abuso de la autoridad.

México: Proporción que representan los distintos rubros del gasto social en el total, 1990-2010



Fuente: Cálculos propios con base en Cuarto informe de Gobierno, 2010, cuadro 128

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx